



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
TUNJA**

Tunja, veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control: Ejecutivo

Radicado: 15001 33 33 003 **2018 00085 00**

Demandante: Luis Gilberto López Bastidas

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la protección Social – UGPP

I. ASUNTO

El expediente ingresó al Despacho con memorial suscrito por la apoderada de la entidad demandada, por medio del cual interpuso y sustentó el recurso de reposición contra el auto de 20 de junio de 2019, por medio del cual se libró mandamiento de pago.

II. ANTECEDENTES

Mediante auto de 20 de junio de 2019, se dispuso obedecer y cumplir lo ordenado por el H. Tribunal Administrativo de Boyacá a través de providencia del 06 de diciembre de 2018, en consecuencia, se ordenó librar mandamiento de pago ejecutivo a favor del señor Luis Gilberto López Bastidas contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las siguientes sumas de dinero:

*“1. Por la suma de **cien millones novecientos catorce mil trescientos setenta y cuatro pesos con treinta y tres centavos m/cte (\$100.914.374,33)** por concepto de diferencias indexadas causadas y no pagadas desde el 01 de agosto de 1999 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia base de la ejecución (21 de julio de 2011), y las diferencias causadas y no pagadas después de la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha de pago de la Resolución No 0036515 de 2012 (23 de diciembre de*

2012), resultante de la reliquidación ordenada en sentencia proferida de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad. Nro. 15001-33-31-004-2008-00035-00.

2. *Por concepto de los intereses moratorios causados y no pagados a favor del ejecutante, entre el 22 de julio de 2011 (día siguiente a la ejecutoria de la sentencia) y la fecha de pago de la Resolución No 36515 (23 de diciembre de 2012), y los intereses causados desde el 24 de diciembre de 2012 hasta la fecha en que se realice el pago, en aplicación de lo normado en los artículos 176 y 177 del CCA, así como lo ordenado en la sentencia objeto de ejecución, los cuales a la fecha de presentación de la demanda (12 de junio de 2018) ascienden al monto de **ciento noventa y ocho millones ciento setenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos con treinta y tres centavos m/cte (\$ 198.179.248,33).***”

III. DEL RECURSO

La apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP manifestó que la sentencia que servía de título ejecutivo en la presente acción no estableció en forma clara y concreta la cuantía a cancelar, por lo que no contenía una obligación clara expresa y exigible y, por tanto, al no prestar merito ejecutivo, no debió librarse mandamiento de pago con base en la misma.

Añadió que la sentencia se profirió en abstracto, luego, la parte beneficiada debió iniciar incidente de liquidación por condena en abstracto, pues no era posible ejecutar la sentencia por indeterminación de la obligación, así que debió rechazarse la demanda por no tramitarse dicho incidente.

De otra parte, con base en lo dispuesto en el numeral 3.º artículo 442 del CGP, propuso las excepciones que denominó:

- i) **Caducidad de la acción ejecutiva**, por cuanto la demanda fue presentada en el tránsito normativo del Decreto 01 de 1984, luego, para que el título fuere ejecutable, debía hacerse exigible luego de los 18 meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, conforme a lo previsto en el artículo

177 *ibídem*, de manera que, en el presente asunto, se advertía que la sentencia de primera instancia se profirió el 7 de julio de 2011, misma que cobró ejecutoria el 21 de julio de 2011, fecha en la que se encontraba en vigencia el CCA, luego la exigibilidad de la sentencia base del título ejecutivo operaba después de transcurridos 18 meses, es decir, para el 22 de enero de 2013. Así las cosas, precisó que el término de caducidad de 5 años debía contarse a partir del 17 de enero de 2011, por lo tanto la oportunidad para presentar la acción ejecutiva vencía el día 22 de enero de 2018, no obstante el medio de control fue incoado el 12 de junio de 2018.

- ii) **Inexistencia del título frente a los intereses moratorios**, toda vez que la entidad demandada nunca estuvo en mora en el pago de diferencias de mesadas pensionales e intereses, pues la ejecutante no presentó oportunamente la solicitud de pago, por lo que, adicionalmente, existía una indebida conformación del título ejecutivo.

Manifestó que una cosa era radicar la sentencia para cobro, y otra era aportar la totalidad de la documentación requerida para el pago del retroactivo pensional, de tal forma que los intereses se suspendían a partir del día siguiente a los primeros seis meses y hasta la radicación de la declaración juramentada

- iii) **No existencia de título ejecutivo idóneo para fundamentar el mandamiento de pago**, puesto que no resultaba procedente librar mandamiento de pago con fundamento en la documentación aportada por la parte demandante, habida cuenta que no se dió cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 297 del CPACA, para la constitución del título ejecutivo.

- iv) **Inexistencia de obligación clara, expresa y exigible**. Señaló que en el *sub examine* el título base de recaudo era complejo, y por ello debía estar integrado por la sentencia judicial, la constancia de ejecutoria de la misma y el recibo de pago de las condenas impuestas a la entidad, de manera que el recibo de pago y la liquidación que discrimine los conceptos pagados hacían parte integral del título ejecutivo complejo.

Estimó que al tenor de lo dispuesto en el artículo 177 del CCA, hoy 195 del CPACA, para que se establezca una mora en el pago de los conceptos ordenados por el Despacho, era necesario que la parte ejecutante aportara el recibo de pago en copia auténtica o en original, situación que no se vislumbró en el expediente.

v) Falta de legitimación en la causa por pasiva. Preciso que la UGPP no se encontraba legitimada en la causa por pasiva, por cuanto no era a quien le correspondía expedir y notificar los actos administrativos que resolvieron las reclamaciones o dieron cumplimiento a las sentencias judiciales presentadas ante el proceso liquidatorio de CAJANAL E.I.C.E., y de otro lado no fue a quien el Gobierno Nacional le encomendó el pago de ese tipo de obligaciones, para resaltar su argumentación indicó el concepto del Consejo de Estado de la Sala de Consulta y Servicio civil, de fecha 2 de octubre de 2014, el cual dirimió un conflicto de competencias administrativas.

vi) Fuerza mayor como eximente de pago de intereses moratorios. Argumentó que el no pago de diferencias de mesadas pensionales e intereses moratorios tenía causa legal, esto es, derivada del proceso administrativo de liquidación forzosa de CAJANAL, circunstancia que configuraba fuerza mayor a la luz de los artículos 64 y 1616 del Código Civil.

vii) No operación de intereses moratorios y capital durante el término de la liquidación de CAJANAL EICE. Explicó que comoquiera que la sentencia base de ejecución cobró ejecutoria el día 16 de julio de 2009, de llegar a no declararse probada la excepción de caducidad, era necesario tener en cuenta que desde el 11 de junio de 2009 y hasta el 11 de junio de 2013, período durante el cual CAJANAL EICE permaneció en liquidación, la obligación no podía generar intereses moratorios en contra de CAJANAL y/o la UGPP, por cuanto la mora producida fue por fuerza mayor o caso fortuito, lo que no daba lugar a indemnización de perjuicios.

viii) Incompetencia de Juez. Adujó que este Despacho no era competente para asumir el conocimiento de este tipo de asuntos, ya que por su naturaleza se encontraban reservados al proceso liquidatorio, teniendo en

cuenta que la sentencia quedó ejecutoriada y presta mérito ejecutivo desde el 21 de julio de 2011, resaltando que CAJANAL EICE se liquidó el día 11 de junio de 2013.

IV) DEL TRASLADO DE EXCEPCIONES

Dentro del término de traslado, la parte demandante discrepó de lo manifestado por la apoderada de la UGPP, por cuanto el título base de la ejecución reunía las condiciones formales para ser considerado como un título ejecutivo complejo, comoquiera que todos los documentos que de él hacen parte fueron aportados en debida forma.

Arguyó que existía una obligación ejecutivamente clara, porque en la sentencia base de recaudo constaban todos los elementos necesarios para tal efecto, se determinaron quiénes son el deudor y el acreedor, así como la suma debida, es decir, el objeto de la prestación cuya satisfacción se reclama.

Así las cosas, indicó que las excepciones denominadas inexistencia del título ejecutivo frente a los intereses moratorios, inexistencia del título idóneo para fundamentar el mandamiento de pago e inexistencia de una obligación clara, expresa y exigible no tenían vocación de prosperidad.

En cuanto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, precisó que el artículo 100 del CGP enumeró expresamente las excepciones previas que podían proponerse, sin que dentro del referido listado se encontrara la de falta de legitimación en la causa por pasiva, de manera que debía ser rechazada por improcedente.

Respecto a la excepción de caducidad, manifestó que la postura asumida por el Consejo de Estado, es que el término de caducidad de la acción ejecutiva se suspendió con ocasión del proceso de liquidación de CAJANAL, razón por la cual no debían ser de recibo los argumentos expuestos por la parte demandada.

V) CONSIDERACIONES

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no reguló el trámite del proceso ejecutivo adelantado en la jurisdicción contencioso

administrativa, si bien, se establecen normas que regulan algunos aspectos propios de esta clase de procesos, como son, por ejemplo: los documentos que prestan mérito ejecutivo, la notificación del mandamiento de pago, la competencia para conocer de los procesos ejecutivos, entre otros; el procedimiento general que debe seguir el juez no se encuentra regulado en esta Ley, por lo cual, conforme a la remisión contenida los artículos 299 y 306 de la Ley 1437 de 2011, corresponde aplicar las reglas propias del proceso ejecutivo establecidas en el Código General del Proceso.

Dicho Estatuto dispone en el artículo 430, inciso 2.º que (...)“*Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada mediante dicho recurso...*”

Asimismo, a la luz de lo dispuesto en el numeral 3.º del artículo 442 *ibidem* los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago.

Por tanto, el recurso interpuesto es procedente para refutar el título base de recaudo en lo relativo a que los documentos que lo integran conformen una unidad jurídica, emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia y, por otra parte, para alegar los hechos que configuran excepciones previas.

En lo relacionado con la oportunidad de este recurso, los artículos 318 y 319 del CGP disponen lo siguiente:

“Artículo 318. Procedencia y oportunidades. (...)

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

Artículo 319. Trámite. *El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado en ella a la parte contraria.*

Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por tres (3) días como lo prevé el artículo 110."

De lo anterior, en el caso concreto, puede concluirse que el recurso ejercido es procedente y fue interpuesto oportunamente, por lo que el Despacho procederá a desatarlo como sigue:

i) Sobre la caducidad de la acción ejecutiva.

El argumento esgrimido por la entidad ejecutada no es de recibo, comoquiera que el Despacho retomará los planteamientos expuestos al momento de librar mandamiento de pago, específicamente, respecto al análisis de la caducidad de la acción ejecutiva.

En tal virtud, se encuentra que la sentencia base de la ejecución fue proferida el 07 de julio de 2011 cobrando ejecutoria el 21 de julio del mismo año (f. 24). El interesado reclamó el cumplimiento de la sentencia ante la entidad en liquidación, el 13 de diciembre de 2011 (así se indica en la Resolución No UGM 036515 de 02 de marzo de 2012 (f. 26).

Por lo tanto, comoquiera que para esa fecha estaba vigente el Decreto 01 de 1984, la exigibilidad judicial de la sentencia como título ejecutivo, acaeció trascurridos los dieciocho meses que contempla el artículo 177 del referido título, es decir el 21 de enero de 2013.

Así las cosas, no operó el fenómeno de la caducidad de la acción ejecutiva habida cuenta que la demanda se formuló dentro del término de los cinco (5) años previstos en el CPACA, pues de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2196 de 2009, conforme a las reglas fijadas por el Consejo de Estado en auto de 30 de junio de 2016¹, los términos de caducidad de las acciones frente a las obligaciones a cargo de la entidad liquidada- CAJANAL, fueron suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, esto es, por espacio de 04 años.

¹ Consejo de Estado, auto de 30 de junio de 2016, expediente rad No 25000-23-42-000-2013-06595-01, M.P William Hernández Gómez

De manera que, terminada la liquidación empezó el computo de los cinco (5) años con que contaba el demandante para formular la demanda ejecutiva, que se cuentan a partir del 12 de junio de 2013, es decir, que el plazo vencía el 12 de junio de 2018, fecha en que fue formulada la demanda ejecutiva (f. 8), por lo que se considera oportunamente presentada.

ii) Sobre la inexistencia del título frente a los intereses moratorios

Según lo planteado por la ejecutada, no hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios reclamados por la parte actora, por cuanto la solicitud de pago no fue presentada oportunamente; argumento que no es de recibo comoquiera que según la norma aplicable al sub lite (art 177 CCA), el acreedor cuenta con seis meses para reclamar el pago sin que cese la causación de intereses, y si pasados los seis meses sin que se presente la solicitud, se interrumpe el término y comienzan a correr nuevamente intereses a partir de la fecha de la petición.

En tal virtud, se tiene que la sentencia cobró ejecutoria el día 21 de julio de 2011, y la parte actora presentó la solicitud de cumplimiento de la sentencia el día 13 de diciembre de 2011, tal como se desprende del contenido de la Resolución No UGM 36515, es decir, dentro de los seis meses de que trata el artículo 177 del C.C.A, de tal forma que los intereses se causan desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia (22/07/2011) y hasta la fecha de verificación del pago de la obligación.

iii) Sobre la inexistencia de título ejecutivo Idóneo para fundamentar el mandamiento de pago e inexistencia de una obligación clara, expresa y exigible.

La recurrente señaló que es obligación de la parte ejecutante aportar todos los documentos que integren el título ejecutivo complejo de cobro en original o copia auténtica, entre ellos, la sentencia, la constancia de ejecutoria de la misma, el recibo de pago de las condenas y la liquidación expedida por la entidad en la cual se discriminan los valores y conceptos que dan cuenta del cumplimiento de la sentencia base de la ejecución, sin que en el presente proceso se hayan allegado al expediente de manera completa, de manera que no es posible determinar el monto presuntamente debido por concepto de intereses moratorios.

De acuerdo a lo anterior, es de resaltar que el numeral 1º del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo previó que constituyen título ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias, es decir, que cuando se pretenda ejecutar una sentencia judicial condenatoria no se requerirá más allá de su copia auténtica y su correspondiente constancia de ejecutoria², pues es esta providencia la que contiene las obligaciones que se pretenden ejecutar.

Bajo ese entendido, tanto las resoluciones emitidas por la entidad ejecutada en aras de dar cumplimiento al fallo, así como el comprobante de pago de los actos administrativos, son meramente anexos de la demanda que dan cuenta del incumplimiento total o parcial de las órdenes emitidas en la sentencia y de las sumas de dinero reconocidas y/o pagadas, de manera que se constituyen en anexos ilustrativos de la demanda, pero que no tienen la connotación de documentos necesarios para la conformación del título ejecutivo.

En el caso concreto, la parte ejecutante aportó copia auténtica de la sentencia de 07 de julio de 2011 (fs. 10-23), proferida por este Despacho, junto con el original de la constancia de ejecutoria (f. 24), documentos que integran debidamente el título ejecutivo. Adicionalmente, dicha providencia contiene unas obligaciones claras y expresas respecto a ajustar la pensión mensual vitalicia de jubilación del demandante, incluyendo los factores salariales devengados en el año de consolidación del status pensional, y de dar cumplimiento a lo allí ordenado en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA, lo cual incluye el pago de los intereses moratorios, de tal suerte que se quedan sin piso los argumentos esbozados por la apoderada de la entidad ejecutada.

iv) De la falta de legitimación en la causa por pasiva

En primer término, es del caso determinar que conforme a lo establecido en el artículo 100 del Código General del Proceso ésta no tiene la calidad de excepción previa, y por ende, no cabe alegarla en los términos del numeral 3º del artículo

² Tribunal Administrativo de Boyacá, auto de 25 de agosto de 2016, proferido dentro del expediente No. 2013-00241 con ponencia del Dr. Fabio Iván Afanador García.

442 *ibídem*, es decir a través del recurso de reposición contra el mandamiento de pago.

La parte demandada adujo que se debe revocar el mandamiento de pago proferido en su contra, comoquiera que no le corresponde asumir el pago de los intereses moratorios, por cuanto tal obligación no le fue impuesta por el Gobierno Nacional, sino que corresponde al Patrimonio Autónomo de Remanentes de CAJANAL EICE en liquidación.

La UGPP expresa que el Decreto 4269 de 2011 le otorgó la competencia para conocer únicamente de las solicitudes relacionadas con el reconocimiento y pago de derechos pensionales y prestaciones sociales radicadas con posterioridad al 8 de noviembre de 2011, correspondiéndole a CAJANAL EICE en liquidación, las causadas con anterioridad a la mencionada fecha y los intereses moratorios por cuanto éstos no hacen parte del objeto misional de dicha Entidad.

El Despacho considera que tal afirmación es válida, en tanto estuvo en desarrollo el proceso liquidatorio de CAJANAL EICE, sin embargo, al culminar éste las obligaciones que no se pagaron en el marco de dicho proceso deben ser asumidas por la entidad que sustituyó a la que fue liquidada. En torno a este punto, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-735 de 2007, al analizar el término que tenían los interesados para presentar sus reclamaciones en el proceso de liquidación de una entidad, providencia en la que precisó:

“Si finalmente no fuere posible el pago de un crédito determinado en el proceso de liquidación, el acreedor podrá hacerlo valer, inclusive judicialmente si fuere necesario, con posterioridad a aquel y mientras el derecho no prescriba, frente a la entidad que se subroga en los derechos y las obligaciones de la entidad liquidada, la cual debe ser señalada en el acto que ordene la supresión o disolución y consiguiente liquidación de la entidad pública”.

Así las cosas, los pagos pendientes deben ser asumidos por la entidad a quien se subroguen los derechos y obligaciones de la entidad liquidada, por lo que a fin de determinar la obligación que tiene la UGPP, conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 1º del Decreto 169 de 2008, ésta tiene como función el reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo

de las entidades públicas del orden nacional frente a las cuales se ordene su liquidación. Esta función que, en forma general, le fue impuesta respecto a las entidades de orden nacional liquidadas, se hizo explícita en forma específica frente a CAJANAL EICE en el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, modificado por el artículo 2º del Decreto 2040 de 2011, normativa que determinó que una vez terminado el proceso de liquidación las reclamaciones y procesos judiciales, los asumiría la UGPP; disposiciones a las cuales se hizo alusión en la parte considerativa de la Resolución No. 4911 de 11 de junio de 2013 *“por medio de la cual se declara terminado el proceso de liquidación de Cajanal EICE en Liquidación”*.

Adicionalmente, la demandada no acreditó que la obligación que pretende recaudarse haya entrado al patrimonio de pasivos y contingencias de CAJANAL, lo cual resulta indispensable para que sea éste quien la asuma.

Por lo expuesto, contrario a lo que plantea la apoderada de la parte ejecutada existen disposiciones que establecen la competencia de la UGPP para asumir deudas que no fueron pagadas en desarrollo del proceso liquidatorio, razón por la cual el argumento esbozado no se encuentra llamado a prosperar como argumento en contra de los requisitos formales del título presentado para el cobro.

v) De la fuerza mayor como eximente de pago de intereses moratorios y de la no operancia de intereses moratorios y capital durante el término de liquidación de CAJANAL EICE

Indicó la recurrente que en virtud del proceso liquidatorio de Cajanal, se limitaron las acciones que desarrollaría, prefiriendo aquellas tendientes a garantizar el trámite y reconocimiento de las obligaciones pensionales y las actividades afines a dichas obligaciones, dentro de las cuales no se encuentran los intereses moratorios previstos en el artículo 177 del CCA., por lo que el no pago de intereses moratorios hoy pretendido tiene una causa legal, derivada del proceso administrativo de liquidación forzosa de CAJANAL, circunstancia que se configura en fuerza mayor, pues admitir el pago de los mismos, sería tanto como desconocer la naturaleza del proceso de liquidación en el reconocimiento de los créditos y deudas que está sometido a la existencia de recursos, con el fin de cubrir todos las acreencias en igualdad de condiciones.

Al respecto, se debe reiterar lo expuesto en anterior excepción, así como a lo largo de este proveído, respecto a que existen disposiciones que establecen la competencia de la UGPP para asumir deudas que no fueron pagadas en desarrollo del proceso liquidatorio, tal como lo advirtió la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en providencia del 2 de octubre de 2014, al resolver sobre un conflicto de competencia administrativa entre CAJANAL y la UGPP, al determinar que la UGPP debía asumir el pago de los intereses moratorios en los casos en los cuales dicha entidad hubiese dado cumplimiento a un fallo donde la condenada fuese CAJANAL EICE en liquidación, razón por la cual los argumentos esbozados no se encuentra llamados a prosperar.

vi) Incompetencia del Juez:

La apoderada de la parte demandada argumentó que el Juzgado no puede asumir competencia en el proceso de la referencia, en atención a que por su naturaleza, se encuentra reservado al proceso liquidatorio, comoquiera que la sentencia prestó mérito ejecutivo desde el 21 de julio de 2011 y CAJANAL terminó su proceso liquidatorio el 11 de junio de 2013.

El Despacho no comparte el argumento planteado por la entidad demandada, toda vez que el proceso liquidatorio de CAJANAL ya culminó, por ende, dicha circunstancia no puede afectar en forma alguna la competencia de los jueces, por el contrario, de acuerdo a lo establecido en artículo 297 del CPACA, los juzgados administrativos son competentes para conocer de los procesos ejecutivos provenientes de sentencias judiciales proferidas por la jurisdicción contenciosa administrativa sin hacer discriminación alguna, de tal forma, que por este único motivo se podría concluir que existe competencia para conocer de fondo el presente asunto.

En este orden, se concluye que los argumentos expuestos por la entidad demandada no se encuentran llamados a prosperar, razón por la cual no procede reponer el auto de 20 de junio de 2019, por medio del cual se libró mandamiento de pago ejecutivo a favor del señor Luis Gilberto López Bastidas.

De conformidad con lo antes expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja.

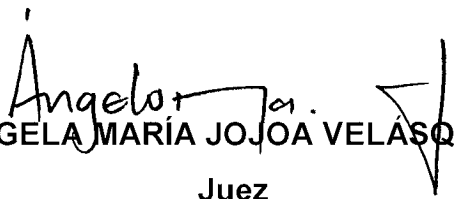
RESUELVE

PRIMERO.- No reponer el auto del 20 de junio de 2019, según las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO.- Declarar no probadas las excepciones de caducidad de la acción ejecutiva, inexistencia del título frente a los intereses moratorios, no existencia del título ejecutivo idóneo para fundamentar el mandamiento de pago, inexistencia de obligación clara expresa y exigible, falta de legitimación en la causa por pasiva, fuerza mayor como eximente de pago de intereses moratorios, no operancia de intereses moratorios y capital durante el término de liquidación de Cajanal EICE e incompetencia del juez, propuestas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por lo expuesto en esta providencia.

TERCERO.-Reconocer personería a la abogada Laura Maritza Sandoval Briceño, identificada con C.C. N° 46.451.568 y T.P. N° 139.667 del C. S. de la J., para actuar como apoderada judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en los términos del poder visto a folios 169 y s. s del expediente.

Notifíquese y cúmplase


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
N° <u>48</u> De Hoy 27 de <u>septiembre</u> de 2019 A LAS 8:00 a.m.
 FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO

³ AMRS

³ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 27 de septiembre de 2019 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández - Secretario